



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 99 ORDINARIA

JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del jueves trece de octubre de dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente en funciones José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales no asistió a la sesión previo aviso.

Dada la ausencia del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el señor Ministro Cossío Díaz asumió la Presidencia del Tribunal Pleno en su carácter de decano para el desarrollo de esta sesión, en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número noventa y ocho ordinaria, celebrada el lunes diez de octubre del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves trece de octubre de dos mil dieciséis:

I. 121/2015

Acción de inconstitucionalidad 121/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 10, fracciones I, III, IV y V, y transitorio octavo, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del mencionando Estado el veintidós de octubre de dos mil quince, mediante Decreto 1323. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso:

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de las fracciones I, III, IV y V, del artículo 10; así como el párrafo primero del artículo Octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, expedida mediante Decreto 1323, publicado en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el veintidós de octubre de dos mil quince. TERCERO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Oaxaca. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.”

La señora Ministra ponente Luna Ramos presentó los primeros tres considerandos relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

La señora Ministra ponente Luna Ramos presentó el considerando cuarto, denominado “Análisis del único concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de



Oaxaca". El proyecto propone declarar la invalidez de los artículos 10, fracciones I, III, IV y V, y transitorio octavo, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, en razón de que imponen una cuota doble a los trabajadores para la integración del fondo de pensiones, tema que ha sido resuelto por este Tribunal Pleno en dos precedentes (acciones de inconstitucionalidad 101/2014 y 19/2015), en el sentido de que resulta incongruente que a la pensión le sea descontado un porcentaje para el fondo de pensiones, pues la pensión no es un salario, y el trabajador no está en condiciones de laborar para seguir aportado al fondo de pensiones, lo cual se traduce en una falta de igualdad y un trato inequitativo entre un trabajador activo y un pensionado, lo que transgrede los artículos 1º y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Recapituló que los artículos impugnados establecen:

"Artículo 10. El Fondo de Pensiones, se constituirá con: I. Las aportaciones a cargo del Gobierno del Estado, equivalente al 2% del sueldo base de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, y el 2% de las pensiones de los Pensionados; III. Las cuotas de los jubilados, equivalente al 1% de su pensión; IV. Las cuotas de los pensionados, equivalente al 1% de su pensión; V. Las cuotas de los pensionistas, equivalente al 1% de su pensión; OCTAVO. Por lo que respecta a las cuotas de los



pensionados conforme a los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo todos transitorios, su importe será equivalente al 1% de su pensión. El Fondo de Pensiones descontará y retendrá el importe de la cuota correspondiente, valiéndose del procedimiento previsto en la presente Ley”, los cuales se encuadran al supuesto analizado en los precedentes referidos.

Aclaró que, para efectos de esta ley, se debe entender a los “jubilados” como los exintegrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, a los “pensionados” como los exintegrantes del cuerpo de policía, y a los “pensionistas” como a todos aquellos que reciben un beneficio por una pensión, como pueden ser las viudas, las personas que están en situación de orfandad o los concubinarios.

Precisó que se propone la invalidez del artículo 10, fracción I porque, si bien se refiere a las aportaciones del Estado, indica que constituyen el dos por ciento del sueldo de los trabajadores en activo y el dos por ciento de las pensiones de los pensionados, por lo que implica una reconstrucción del sistema de reparto; sin embargo, derivado de los comentarios de algunos señores Ministros, previos a esta sesión, podría suprimir dicha fracción I de la declaratoria de invalidez y si, por el contrario, la mayoría estimara que debería declararse inválida, se propondría la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo transitorio octavo, párrafo segundo, el cual contempla las aportaciones de la autoridad, por razón de la reconfiguración del fondo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Adelantó que, cuando el Comité de Tesis apruebe los criterios derivados de los precedentes, los cuales aún no están publicados, se agregarán al engrose.

El señor Ministro Pérez Dayán recordó que, en los precedentes, el planteamiento consistía en una violación al principio de igualdad, pues tanto a los trabajadores en activo como a los pensionados se les descontaba una cantidad igual, estimando que no era lo mismo un trabajador en activo, quien tiene como expectativa gozar de una pensión, frente a aquél quien durante toda su vida laboral contribuyó y, como resultado de la norma, tendría que seguir aportando en la misma medida que los trabajadores en activo. Como consecuencia, este Tribunal Pleno declaró la invalidez de los preceptos impugnados, bajo el argumento de que el trabajador pensionado, quien durante toda su vida laboral pagó sus cuotas, no tiene por qué cubrir una cantidad sobre tales aspectos. Recontó que, si bien la señora Ministra Luna Ramos y él coincidieron con la invalidez de la norma, consideraron que la razón principal radicaba en que la violación al principio de igualdad respondía a que las cuotas de unos y otros debía ser diferenciada, pues ambos hacían uso de las instalaciones, médicos y todas las prestaciones que implica el sistema de seguridad social, siendo que todos los usuarios debían cubrir los gastos administrativos que implica ese servicio.

En el caso concreto, señaló que el artículo 10, fracción I, no hace distingo alguno respecto de las aportaciones del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estado, siendo entonces que los trabajadores pensionados no tendrán que cubrir nada, por lo que estaría por su validez.

Por lo que hace a las fracciones II, III, IV y V, indicó que la primera prevé una aportación de los trabajadores activos del dos por ciento de su sueldo base, y las otras tres a los jubilados, pensionados y pensionistas equivalente al uno por ciento de su pensión, lo cual significa que, si en el precedente lo irrazonable era que se previera un mismo porcentaje de aportaciones para sufragar los gastos administrativos para trabajadores activos y pensionados, dicho uno por ciento resulta proporcional, además de que se reflejará en la calidad de los servicios, en la comodidad de las instalaciones y en todo lo que implica el funcionamiento de un servicio de esta naturaleza pues, no obstante que se debe reconocer una vida laboral en la que contribuyeron los ahora pensionados, todos los usuarios del sistema de solidaridad social, sean trabajadores o pensionados, deben aportar, en la medida de sus capacidades económicas, para que las instituciones funcionen adecuadamente.

En ese tenor, consideró que ese uno por ciento resulta racional, necesario, útil y lógico, máxime que, en caso de que se determine que no contribuyan los pensionados, el costo del funcionamiento de las instituciones seguirá siendo el mismo, lo cual provocará que los trabajadores en activo tengan que contribuir no sólo con el dos por ciento, sino probablemente con más. Por tanto, y habiendo aclarado su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

voto en los precedentes, se pronunció en contra del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas rememoró haber expresado reservas y elaborado voto concurrente en los precedentes citados, al considerar que la veda para establecer algún porcentaje a quienes han generado una pensión no debe ser absoluta, porque existen distintos sistemas de seguridad social y diversas formas de financiarlo.

Se manifestó en favor del proyecto, ya que las normas no justificaron debidamente la necesidad de imponer una carga a los pensionados y jubilados, de acuerdo a lo establecido en el orden internacional, en la inteligencia de que este tipo de prestaciones está sujeto a la capacidad económica, además de que, durante su vida laboral, generaron una pensión.

Aclaró que fue uno de los señores Ministros que le sugirió a la señora Ministra ponente no invalidar la fracción I, puesto que en los precedentes se trató de un sistema totalmente articulado, por lo que, de haberse dejado intocadas algunas porciones normativas, se alteraría todo el sistema, lo cual no ocurre en el presente caso, siendo que, si se eliminar la obligación del Estado, no sólo no contribuiría, sino que generaría un problema al no tener base legal para la aportación.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Advirtió que, con la invalidez de las otras tres fracciones, se obligará la revisión del régimen financiero de las pensiones, lo que conllevaría a que el Congreso del Estado legisle nuevamente.

La señora Ministra Piña Hernández aclaró que no participó en los precedentes. Se expresó de acuerdo con el proyecto, por las razones del señor Ministro Franco González Salas, en cuanto a que tendría que justificarse la restricción contenida en el artículo transitorio octavo.

No compartió los argumentos del señor Ministro Pérez Dayán porque los servicios médicos no están contemplados en los artículos impugnados, sino el establecimiento de un fondo de pensiones, como se observa de la lectura del artículo 10, fracciones I y II, impugnado.

Indicó que, de invalidarse la fracción I, tendría que declararse inválido todo el artículo 10, puesto que uno de los conceptos de invalidez fue que la fracción I aludía al dos por ciento de las pensiones de los pensionados, que la diversa fracción IV se contemplaban a las cuotas de los pensionados equivalentes al uno por ciento y, en el transitorio octavo, también del uno por ciento, por lo que sugirió declarar únicamente la invalidez de la fracción I, en la porción normativa “y el 2% de las pensiones de los Pensionados”, lo cual haría valer en un voto concurrente.

El señor Ministro Pérez Dayán aclaró que, en los precedentes, la estructura del fondo de pensiones lo llevó a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la convicción de establecimiento de una cuota, pero no como lo preveía esa norma (cantidades iguales a pagar por los trabajadores activos y pensionados), pues dicho fondo no sólo implica una cantidad específica a recibir mensualmente, sino todo un sistema que funciona en razón de los propios pensionados: manejo de nómina, entrega a bancos, visitas de supervivencia, entre otros, a lo que denominan gastos administrativos. Admitió que, como apuntó la señora Ministra Piña Hernández, los gastos médicos no están englobados y, por ello, su intervención se enfocó en los gastos administrativos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se manifestó a favor del proyecto, concordando en que el artículo 10, fracción I, no debe incluirse en la declaratoria de invalidez porque, en primer término, se refiere a los aportaciones del Gobierno, no a las cuotas de los pensionados, por lo que no podría aplicársele la argumentación contemplada para las demás fracciones (III, IV y V).

Asimismo, compartió lo dicho por el señor Ministro Franco González Salas, en cuanto a que, al invalidar las fracciones III, IV y V, necesariamente tendrá que haber un replanteamiento para integrar este fondo de pensiones.

Estimó que los artículos 10, fracción I, y el transitorio octavo, párrafo primero, prevén distintas hipótesis, por lo que no deberían vincularse para declarar su invalidez. Por ello, valoró que debería reconocerse la validez del artículo 10, fracción I.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Adelantó que, respecto de los efectos de la invalidez, el artículo 2, fracción IV (Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: VI. Cuotas: Los enteros que deben cubrir los integrantes de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública, pensionados y pensionistas, conforme a lo establecido en esta Ley) debería declararse inválido porque su validez depende de las normas cuya invalidez se propone.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció de conformidad con el proyecto pues, desde la acción de inconstitucionalidad 19/2015, se consideró que la invalidez del precepto no fue el monto del porcentaje del descuento a los pensionados, sino el hecho mismo de descontárseles, por lo que, si bien algunos señores Ministros no participan de este criterio, el precedente es expreso en ese sentido.

En cuanto a la fracción I, explicó que, si bien se ha considerado no invalidarla por no contener por sí mismo un vicio, si de cualquier modo la invalidez propuesta provocará que el legislador establezca de nueva cuenta todo el sistema, por lo menos se tendría que invalidar la porción apuntada por la señora Ministra Piña Hernández. Recalcó que sería más sencillo invalidar todo el precepto, estableciendo en el engrose que la finalidad es que se reconfigure todo el sistema. También se sumó a la sugerencia del señor Ministro Pardo Rebolledo en el considerando de efectos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Piña Hernández aclaró que su voto concurrente no respondía al principio de igualdad, sino porque la medida no estaba justificada. Anunció que se sumaría a lo que la mayoría determine, sea por la invalidez de toda la fracción I o sólo de la parte referente al dos por ciento de las pensiones de los pensionados. Finalmente, secundó la propuesta del señor Ministro Pardo Rebolledo en el considerando de efectos.

El señor Ministro Medina Mora I. cuestionó si el tema que se aborda es competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual podría discutirse en el futuro.

Respaldó el proyecto, en cuanto a que no debe invalidarse el artículo 10, fracción I, pues contempla las aportaciones del gobierno del Estado, estimando que sería inapropiado descontárselas a los pensionistas para constituir el fondo, puesto que ya aportaron durante su vida de trabajo y, por esa misma razón, estará por la invalidez de sus diversas fracciones III, IV y V.

Coincidió con el señor Ministro Pardo Rebolledo en declarar la invalidez extensiva al artículo 2, fracción VI, así como a los artículos 18, párrafo primero, en la porción normativa “y para exigir el pago de adeudos al Fondo de Pensiones”, y 56, fracción VI, en la porción normativa “pensionados, pensionistas”, en tanto que no deben afectarse las pensiones para pagar los fondos respectivos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz se pronunció por la invalidez del artículo 10, fracción I, puesto que se trata de un sistema integral, siendo que, de invalidarse solamente las diversas fracciones III, IV y V, se dejaría un sistema poco claro en cuanto a las fuentes de financiamiento del fondo de pensiones. No se pronunció sobre los artículos transitorio octavo, ni de los diversos 2, fracción VI, 18, párrafo primero, y 56, fracción VI, puesto que forman parte de los efectos.

La señora Ministra ponente Luna Ramos, respecto de la salvedad de los precedentes indicada por el señor Ministro Pérez Dayán, indicó que en aquella ocasión se alegó la inconvencionalidad de las normas impugnadas con referencia al artículo 71, punto 1, del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social, el cual señala que “El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del Miembro y la de las categorías de personas protegidas”, por lo que no prohíbe la posibilidad del cobro de este tipo de cuotas a los pensionados; sin embargo, votaron con la determinación unánime, en el sentido de que el cobro de las cuotas a



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

trabajadores en activo y a trabajadores pensionados provocaba un trato igual en una situación desigual.

En el caso, resaltó que no se invocó dicho convenio, por lo que el proyecto sólo aplica los precedentes votados unánimemente.

Recordó que, desde la presentación de este considerando, explicó por qué el proyecto contemplaba su inconstitucionalidad pero, de determinar la mayoría lo contrario, no tendría inconveniente en modificarlo para reconocer su validez. Por tanto, sostuvo el proyecto para proponer la invalidez del artículo 10, fracciones I, III, IV y V, impugnado.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció en favor del proyecto, puesto que se apega apropiadamente a los precedentes.

El señor Ministro Pérez Dayán aclaró que la fracción I sólo refiere a las aportaciones del gobierno, no de los trabajadores, además de que sólo resultaría inválido de pronunciarse ocho votos en ese sentido.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, denominado "Análisis del único concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Seguridad Pública del Estado de Oaxaca”, en su parte primera, de la cual derivaron los siguientes resultados:

Se expresó una mayoría de seis votos en contra de los señores Ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto de declarar la invalidez del artículo 10, fracción I, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente en funciones Cossío Díaz votaron a favor.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente en funciones Cossío Díaz, respecto de declarar la invalidez del artículo 10, fracciones III, IV y V, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente.

Dada la votación alcanzada y en virtud del consenso del Tribunal Pleno, la votación definitiva deberá indicar:

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Respecto del considerando cuarto, denominado “Análisis del único concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca”, en su parte primera, consistente en reconocer la validez del artículo 10, fracción I, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea y Presidente en funciones Cossío Díaz votaron en contra.

La señora Ministra ponente Luna Ramos presentó el considerando cuarto, denominado “Análisis del único concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca”, en su parte segunda. El proyecto, en su página veinticuatro, propone determinar que:

“En razón de lo anterior, las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, así como el primer párrafo del artículo Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca son inconstitucionales, porque en ellos se aplican deducciones indistintamente tanto a los trabajadores en activo como a los pensionados y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

pensionistas; lo que genera un trato igual respecto de características distintas, que no encuentra justificación constitucional.”

El señor Ministro Pérez Dayán mantuvo su voto en contra del proyecto, al considerar que ese artículo transitorio es válido.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta del considerando cuarto, denominado “Análisis del único concepto de invalidez, relativo a la inconstitucionalidad de las fracciones I, III, IV y V del artículo 10, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca”, en su parte segunda, consistente en declarar la invalidez del artículo transitorio octavo, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente en funciones Cossío Díaz, respecto de declarar la invalidez del artículo 10, fracciones III, IV y V, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz abrió la discusión en torno al considerando quinto, relativo a los efectos de la invalidez de la norma.

El señor Ministro Pardo Rebolledo precisó su propuesta y sugirió declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 2, fracción VI, en la porción normativa “pensionados y pensionistas”.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto para declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 2, fracción VI, en la porción normativa “pensionados y pensionistas”, como sugirió el señor Ministro Pardo Rebolledo, así como de los artículos 18, párrafo primero, en la porción normativa “y para exigir el pago de adeudos al Fondo de Pensiones”, y 56, fracción VI, en la porción normativa “pensionados, pensionistas”, como propuso el señor Ministro Medina Mora I.

El señor Ministro Pérez Dayán observó que las sugerencias de extensión de invalidez responden a que los pensionistas no deben cubrir ninguna aportación; sin embargo, al estimar que, bajo la perspectiva de racionalidad y proporcionalidad, deben aportar algo para la sustentabilidad del servicio, estaría en contra.

El señor Ministro Franco González Salas expresó reserva respecto del artículo 18, párrafo primero, porque quedaría muy genérico, a saber, “Las pensiones sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

alimentos por mandato judicial”, es decir, no referido a los pensionados.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con la duda del señor Ministro Franco González Salas, tanto en el artículo 18, párrafo primero, como en el 2, fracción VI, pues contienen definiciones genéricas que, quizás, valdría la pena no invalidar.

El señor Ministro Franco González Salas adelantó que estará a lo que resuelva la mayoría del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz estimó que la pregunta del señor Ministro Franco González Salas se concreta en: ¿realmente no se pueden afectar de ningún modo a las pensiones para exigir el pago de adeudos? Aclaró que esto no implica un pronunciamiento de su parte, sino que sólo es para ordenar la discusión.

La señora Ministra ponente Luna Ramos se manifestó de acuerdo con la extensión de invalidez al artículo 2, fracción VI, puesto que define que los pensionados y pensionistas paguen cuotas, así como el artículo 18, párrafo primero, ya que involucraría exigir el pago de adeudos al fondo de pensiones, además de que, con la propuesta concreta, sólo podrían afectarse las pensiones por el pago de alimentos.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo a los efectos de la invalidez de la norma,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Consistente en declarar la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 2, fracción VI, en la porción normativa “pensionados y pensionistas”, 18, párrafo primero, en la porción normativa “y para exigir el pago de adeudos al Fondo de Pensiones”, y 56, fracción VI, en la porción normativa “pensionados, pensionistas”, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente en funciones Cossío Díaz. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán votaron en contra.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto para determinar que las declaratorias de invalidez surtan efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca.

El señor Ministro Pardo Rebolledo sugirió que se agregue que se publique esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz, el secretario general de acuerdos dio



lectura a los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, de la siguiente forma:

“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 10, fracción I, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, expedida mediante Decreto 1323, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el veintidós de octubre de dos mil quince. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 10, fracciones III, IV y V, y transitorio octavo, párrafo primero, de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, expedida mediante Decreto 1323, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el veintidós de octubre de dos mil quince y, en vía de consecuencia, de los diversos artículos 2, fracción VI, en la porción normativa “pensionados y pensionistas”, 18, párrafo primero, en la porción normativa “y para exigir el pago de adeudos al Fondo de Pensiones”, y 56, fracción VI, en la porción normativa “pensionados, pensionistas”, del referido ordenamiento. CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Oaxaca. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.”

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

II. 90/2015

Acción de inconstitucionalidad 90/2015, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez del artículo 5, fracciones IV, IV Bis y V, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reformada mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veinte de agosto de dos mil quince. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: “*PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de las fracciones IV, IV Bis y V del artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de agosto de dos mil quince, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, tomándose en consideración que dicha declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.”

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó los primeros cuatro considerandos relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 5, fracciones IV, IV



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Bis y V, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, en razón de que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión de legislar sobre los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal y de justicia penal para adolescentes, derivada de las reformas de dos mil trece y dos mil quince al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, correspondiente a la implementación de un nuevo sistema de justicia penal en toda la República, reservándosele la facultad de expedir la legislación única sobre mecanismos de solución de controversias en materia penal y de justicia penal para adolescentes, siendo que las legislaturas de las entidades federativas dejaron de tener competencia para legislar en esas materias.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sugirió citar los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 107/2014, 106/2014 y 29/2015, así como precisar que el veinte de agosto de dos mil quince (fecha de publicación de la norma impugnada), el entonces Distrito Federal tenía un régimen diferente al de las entidades federativas, que se regulaba por el artículo 122 constitucional.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto con las sugerencias realizadas.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, la cual se aprobó en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando sexto, relativo a los efectos. El proyecto propone que la declaración de invalidez surta efectos retroactivos al veintiuno de agosto de dos mil quince, fecha en que entró en vigor la norma impugnada.

El señor Ministro Laynez Potisek anunció voto en contra, como lo ha hecho en la parte de efectos de las acciones de inconstitucionalidad en materia penal, porque el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria no permiten retrotraer efectos de una sentencia hacia el pasado con una fecha específica, sino que se apliquen, en su caso, efectos retroactivos en beneficio.

El señor Ministro Franco González Salas coincidió con el señor Ministro Laynez Potisek, pues esos efectos deben analizarse casuísticamente, dejando en libertad al juzgador para que determine lo que proceda.

La señora Ministra Luna Ramos se apartó de este considerando, al valorar que los efectos deben surtir a partir de la notificación al órgano legislativo, además de que deben regir los principios en materia penal, previstos en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recordó que en los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 6/2015, 7/2015 y 2/2016 se imprimieron efectos en el sentido de que el juez determinará, caso por caso, los efectos de retroactividad, por lo que se posicionará en ese sentido.

El señor Ministro Medina Mora I. suscribió lo expuesto por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

La señora Ministra Piña Hernández se posicionó en contra porque el artículo 105 constitucional indica que, al declararse la invalidez de la norma penal, tendrá efectos retroactivos, siempre y cuando sea en beneficio de la persona, además de que existe una tesis jurisprudencial de este Tribunal Pleno al respecto. Anunció voto particular.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para ajustarse a los precedentes apuntados por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consultó cuál sería la propuesta concreta. Señaló que, de optarse porque no haya efectos retroactivos, implicaría que no tendría efectos sobre los procesos tramitados anteriormente, por lo que no estaría de acuerdo con la propuesta; pero, si se trata de que los operadores jurídicos apliquen esta declaratoria de invalidez en beneficio del justiciable, estaría a favor del proyecto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Luna Ramos dio lectura al artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprenden los principios en materia penal, por lo que estimó que deben quedar los efectos a la valoración del caso concreto.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz preguntó cómo se ajustaría el proyecto.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para aclarar que quedan en libertad los operadores jurídicos para determinar en cuáles casos se aplicará la declaratoria de invalidez retroactivamente y en cuáles no, atendiendo a los principios que rigen la materia penal.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que la declaración de invalidez debería surtir efectos a partir de la notificación al órgano legislativo, en la inteligencia de que, al tratarse de un asunto en materia penal, están las salvedades establecidas en el citado artículo 45.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sugirió que se ajustara el engrose conforme a los párrafos bien definidos en los precedentes, y no tratar de redactarlo en estos momentos.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando sexto, relativo a los efectos, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán. Los señores Ministros Piña Hernández y Presidente en funciones Cossío Díaz votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro Pardo Rebolledo anunció voto concurrente.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz, el secretario general de acuerdos dio lectura a los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, de la siguiente forma:

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 5, fracciones IV, IV Bis y V, de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de agosto de dos mil quince, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo; tomándose en consideración que dicha declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.”

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por



Sesión Pública Núm. 99

Jueves 13 de octubre de 2016

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

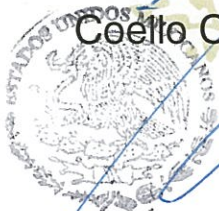
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Unanimitad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con nueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes diecisiete de octubre del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente en funciones José Ramón Cossío Díaz y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN